

Guatemala: Q 4.00
Honduras: L 12.00
El Salvador: US$ 0.60
Nicaragua: C$ 10.00
Costa Rica: ¢ 500.00

Segunda Quincena
Septiembre 2015

"Por la Reunificación Socialista de la Patria Centroaméricana"

www.elsoca.org www.facebook.com/elsoca.org www.twitter.com/elsocca

EL SALVADOR.- LA INEFICACIA DEL "PACTO DE ATACO"



COSTA RICA.- LIBERTAD INMEDIATA A ORLANDO BARRANTES E IVÁN ANGULO!!





NICARAGUA.- Sangriento conflicto por tierras indígenas



GUATEMALA.- Un gobierno a la medida de la oligarquía y el imperialismo



HONDURAS.- John Biehl y el diálogo de los corruptos



COSTA RICA.- División sindical favorece al gobierno y al neoliberalismo

EL SALVADOR.- CORRUPCIÓÓN, IMPUNIDAD Y VIOLENCIA

La región Centroamericana sufre los efectos de la crisis del capitalismo y del agotamiento del modelo económico neoliberal, así como las políticas intervencionistas del imperialismo norteamericano, que consideran la zona su patio trasero. Pero dentro de Centroamérica, los países del llamado Triángulo Norte (Guatemala, El Salvador y Honduras) se han convertido en una prioridad en la agenda imperialista.

Para bajar la presión social, los gobiernos del Triángulo Norte han centrado sus programas de asistencialismo social en los sectores de extrema pobreza, pero mientras implementan dichos programas asfixian al conjunto de la clase trabajadora y la clase media, sectores que han sufrido un desmejoramiento en el nivel y calidad de vida.

La falta de crecimiento económico y de oportunidades laborales en El Salvador está forzando a la juventud a migrar especialmente hacia los Estados Unidos. El Salvador se ha convertido actualmente en el país que sufre el más grave estancamiento económico con graves consecuencias sociales, como la violencia.

Los países del Triángulo Norte son víctimas de la violencia y delincuencia, la cual en países como El Salvador, Honduras y Guatemala es atribuida a las maras y pandillas y al crimen organizado. Esta es una verdad a medias, ya que en muchos casos los altos mandos militares y de los cuerpos de seguridad, forman parte de las estructuras del crimen organizado.

Esta situación caótica ha obligado al imperialismo norteamericano a adoptar una política preventiva y ser ellos quienes abanderan la lucha por reformas institucionales y de lucha contra la corrupción, antes de que las masas lo hagan por iniciativa propia, Por ello impulsan el relativamente exitoso modelo de la CICIG en Guatemala, para que sea aplicado en El Salvador y Honduras, obviamente con las particularidades de cada caso.

En Honduras, el imperialismo norteamericano ha alentado la justa marcha de las antorchas, para presionar suavemente al gobierno de Juan Orlando Hernandez, para retomar parcialmente el modelo de la CICIG.

En El Salvador está en marcha la misma operación, existe una presión del imperialismo para crear la CICIES. La derecha agrupada en ARENA ha incentivado marchas, disfrazadas de "sociedad civil", enarbolando la bandera de la lucha contra la corrupción y contra la violencia, el principal problema que aqueja a los salvadoreños.

El gobierno del FMLN y Sanchez Cerén ha rechazado tajantemente la conformación de la CICIES. Marcos Rodríguez Secretario de Participación Ciudadana y Transparencia manifestó recientemente"…que en El Salvador existe una "institucionalidad" que no requiere un organismo como la CICIG de Guatemala a no ser que, excepcionalmente, sirva para investigar a los pasados gobiernos del partido de derecha Alianza Republicana Nacionalista (ARENA)…" .

Estas declaraciones reflejan un pequeño cambio en la mentalidad de los dirigentes del FMLN, la ingenua ilusión que una comisión imperialista solo investigaría a los gobiernos de ARENA y no a los del FMLN. En realidad, la lucha contra la corrupción no puede estar en manos de comisiones controladas por el imperialismo, o por los gobernantes de turno, sino que debe estar en manos de los trabajadores, quienes deben luchar por el control obrero en las instituciones del Estado y en las empresas privadas.

.



ESCA No. 206
Segunda Quincena de Septiembre 2015

Impresión:
21 Septiembre 2015

DIRECTOR:
Victoriano Sánchez

CONSEJO EDITORIAL:
Armando Tezucún,
Germán Aquino,
Maximiliano Cavalera,
Gerson de la Rosa,
Eduardo Villalobos,
José Manuel Flores Arguijo (in Memorian).

DISEÑO Y MAQUETACIÓN:
Ricardo Ruiz

AQUI NOS ENCONTRÁS
www.elsoca.org
facebook.com/elsoca.org
twitter.com/elsoca

Redacción:
elsoca@elsoca.org

Secretariado Ejecutivo:
psoca@elsoca.org

Secciones:
psoca_guatemala@elsoca.org
psoca_salvador@elsoca.org
psoca_honduras@elsoca.org
psoca_nicaragua@elsoca.org
psoca_costarica@elsoca.org

EL SOCIALISTA CENTROAMERICANO es una publicación del PARTIDO SOCIALISTA CENTROAMERICANO (PSOCA), fundado y reconstituido el día 4 de Abril del año 2009.

Se publica en dos formatos: una versión digital que se actualiza diariamente (www.elsoca.org) y otra versión impresa que se publica quincenalmente.





JOHN BIEHL DEL RÍO Y EL DIÁLOGO DE LOS CORRUPTOS



Por Maximiliano Fuentes

Hace algunas semanas atrás, se trasladó al país una supuesta comisión de notables que tenía como propósito establecer las condiciones para el gran diálogo nacional. Entre los miembros de dicha comisión se encuentra Jhon Biel del Río, diplomático de nacionalidad chilena y miembro de la Organización de Estados Americanos (OEA) enviado para impulsar el diálogo en Honduras. En su primera visita, se reunió con miembros representantes del gobierno de Juan Orlando Hernández, así como los representantes de los partidos de oposición, Manuel Zelaya Rosales (LIBRE) y Salvador Nasralla (PAC), de la misma manera con los que se hacen llamar representantes del movimiento de indignados.

El diálogo propuesto por la OEA

Si bien es cierto, por medio del diálogo se puede establecer consensos, siempre y cuando se reconozcan los delitos cometidos y los actos de corrupción que históricamente han permanecido en la impunidad, precisamente porque en Honduras la institucionalidad del Estado ha permanecido bajo el control de los grupos empresariales, por cierto, los verdaderos responsables de los actos de corrupción que han cercenado y desbaratado las instituciones del Estado. Situación que les ha permitido enriquecer y aumentar de forma estrepitosa sus fortunas. Sin el reconocimiento anterior, difícilmente podrán establecerse consensos.

Por tal razón, nos oponemos de forma radical a la propuesta de Nasralla, quien en la presente semana opinó que se perdone a los que participaron en el gran latrocinio en contra del IHSS y que se haga borrón y cuenta nueva, sobre los crímenes perpetrados por estos sectores no pueden quedar relegados en el olvido, al contrario, deben ser castigados con todo el peso de la ley.

Precisamente por la incapacidad y la falta de voluntad política en seguir el debido proceso por parte del Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia en contra de los responsables del saqueo del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y otras instituciones del Estado, es que jóvenes con un sentimiento de cambio, renovación y transformación se ven en la necesidad de hacer justicia por sus propias manos. Este tipo de situaciones no ocurrirían si la justicia fuera aplicada de forma correcta, pero los jueces y demás miembros de los órganos administradores de justicia se encuentran al servicio del gran capital y de los grupos de poder.

Los intereses del imperialismo y la oligarquía

Es de recalcar, que la propuesta de diálogo de la Organización de Estados Americanos (OEA) se da en un contexto bastante peculiar, por un lado las intensas movilizaciones en Guatemala que hicieron sucumbir el gobierno de Otto Pérez Molina, por estar vinculado a actos de corrupción y de enriquecimiento ilícito, por otro, movilizaciones multitudinarias por parte del movimiento de los indignados en Honduras. Dichos fenómenos sociales, no dejan de preocupar al imperialismo norteamericano y sus instituciones, razón que les obliga a diseñar estrategias para contener el amplio movimiento social que desestabiliza su zona de control hegemónico.

Por cierto que el diálogo ha sido una táctica fundamental, empleada en diversas ocasiones bajo la finalidad de contener y descompresionar movimientos de transformación social, de la misma manera que lo hicieron durante la lucha contra el golpe de Estado, favoreciendo ampliamente al imperialismo y a la burguesía hondureña para echar andar sus planes de gobierno y control.

Lo cierto es, que la segunda visita de Biel del Río y del resto de comisionados desnudó por completo los intereses del imperialismo norteamericano y del gobierno de Juan Orlando, por cierto, fiel aliado de los Estados Unidos y del gobierno de Barack Obama, por cumplir a cabalidad los planes de ajuste y de miseria impuestos por el Fondo Monetario Internacional (FMI). No es parte de los intereses imperiales impulsar la creación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH), sino más bien impulsar la propuesta de JOH, por cierto elogiado por el propio embajador de los Estados Unidos en Honduras, una vez fue entregado dicho proyecto en la sede de la Embajada en la ciudad de Tegucigalpa.

Definir una estrategia de lucha

La razón es concreta, Juan Orlando y el grupo de corruptos que representa no pretenden que se les impulse ningún proceso a posteriori, por ello ha negociado con los Estados Unidos instalar el Sistema Integral Hondureño de Combate a la Impunidad, institución contralada por el mismo gobierno, y no un ente externo que supervise los actos de corrupción e impunidad en el país.

Desde el PSOCA hacemos un llamado a los trabajadores públicos, gremios, sindicatos, centrales y federaciones obreras y a la militancia del FNRP a construir una estrategia de lucha que conlleve a la caída de JOH: exigir el cese de la impunidad, la destitución del Fiscal General y adjunto, así como el todos aquellos magistrados y altos funcionarios vinculados a las redes de corrupción. Organizar un Paro Nacional desde los sindicatos y organizaciones campesinas, estudiantiles y populares. Exigimos cárcel a los corruptos y la inmediata expropiación de los bienes que han sido adquiridos con fondos públicos, y que estos bienes sean puestos al servicio de un comité conformado por obreros y campesinos.

UN PRIMER BALANCE DE LAS MOVILIZACIONES CONTRA LA CORRUPCIÓN



Por Armando Tezucún

La primera vuelta electoral del 6 de septiembre dio un resultado inesperado. En primer lugar, con cerca del 24% de los votos, resultó el comediante Jimmy Morales, un desconocido en la política, sin un programa de gobierno claro, respaldado por un partido fundado por los veteranos militares de Avemilgua, una asociación de ultra derecha cuyos miembros ni siquiera fueron tomados en cuenta por los militares que gobernaron con Pérez Molina. El segundo lugar fue para Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza, con el 19.75% de la votación. El tercer lugar fue para Manuel Baldizón de Lider, quien daba por seguro que pasaría a segunda vuelta, con el 19.38%; los resultados adversos llevaron a Baldizón a renunciar a su partido y alejarse de la política, denunciando que fue víctima de fraude y linchamiento político.

El hecho de que el candidato que quedó a la cabeza es un comediante de ideas conservadoras, sin una estrategia de gobierno clara ni experiencia, y sobre todo, con el respaldo de exmilitares de extrema derecha involucrados en las masacres del conflicto armado interno, ha provocado en los sectores más pensantes y reflexivos del movimiento anti corrupción que ha protestado en las calles desde abril, una sensación de incertidumbre, frustración y desconcierto ¿De qué sirvieron cinco meses de protestas si al final las opciones para la segunda vuelta son un títere de los militares derechistas y una mujer que ya hizo gobierno con la UNE y fue muy cuestionada por su manejo de los programas asistenciales? Se afirman cosas como "La sabiduría del votante guatemalteco es de exportación. Su calidad no tiene precio. Aconseja que si logras salir vivo de un pantano, pues que vayas a buscar una letrina y te lances de cabeza para limpiarte el lodo" (Godo de Medeiros, correo electrónico del 13/09/15), o "…al cabo de todas las marchas, procesos legales, defenestración presidencial y demás, en las recientes elecciones terminamos dándole el primer lugar del voto a un candidato cuya presidencia sería devastadora, incluso comparada con la alternativa que ofrece la "Evita Perón" guatemalteca" (Alberto Fuentes, Nomada 17/09/15).

Pensamos que la tarea de los analistas e intelectuales progresistas no es culpar al votante por los resultados electorales ni caer en la desesperación. Se trata de que hagamos un análisis de las fuerzas sociales que están actuando en la política guatemalteca para explicar los fenómenos y definir el rumbo que debe llevar el movimiento popular para lograr los objetivos de sus luchas.

La política de Estados Unidos con el Plan Alianza Para la Prosperidad

Recordemos que la crisis de los niños migrantes que se dio el año pasado, con miles de niños centroamericanos retenidos en la frontera de México y Estados Unidos, condujo a la firma del Plan Alianza Para la Prosperidad entre el gobierno de Obama y los gobiernos de Triángulo Norte. Este plan contempla un aporte de mil millones de dólares por parte de Estados Unidos, una pequeña parte del gasto total que implica el plan (el resto lo tendrán que poner los gobiernos de área mediante préstamos a los organismos financieros internacionales, he ahí parte del negocio). Se supone que el plan implica mejoras en infraestructura e inversión social que propicie la llegada de inversión extranjera, que a su vez mejorará las condiciones de vida de la población centroamericana, en cuanto al empleo en primer lugar. El objetivo es mejorar las condiciones de vida de la población, los jóvenes en particular, para frenar el enorme flujo migratorio que pone en aprietos a Estados Unidos, y por otro lado, desarrollar los planes ya existentes para combatir el narcotráfico. Además, Estados Unidos pretende con este plan reafirmar su dominio en la región para contrarrestar la creciente influencia de los imperialismos chino y ruso.

Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos esta vez requiere una garantía de que la inversión que hará no caerá en manos de funcionarios corruptos y de que sus capitales tendrán un ambiente de certeza propicio para generar sus ganancias.

El impulso del Plan Alianza Para la Prosperidad es el momento en el que Estados Unidos, en alianza con un sector de la burguesía, organizado en el Comité Coordinador de Asociaciones Comerciales, Industriales, Agrícolas y Financieras (Cacif), y con la colaboración de un sector del ejército (sobretodo oficialidad joven), decide sacudirse a los grupos burgueses corruptos que han copado las instituciones del Estado, utilizando para ello a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), que funcionaba por mandato de la ONU desde hacía varios



años, y el Ministerio Público.

Las movilizaciones de las capas medias y pequeña burguesía urbanas

La denuncia contra la estructura de defraudación aduanera La Línea, donde resultó implicada la ex presidenta Roxana Baldetti, numerosos funcionarios públicos y el mismo presidente Otto Pérez Molina, tuvo el efecto colateral de desencadenar un movimiento masivo de protesta popular contra el gobierno, la corrupción, y el sistema político en general. Este despertar de la población le dio una dinámica particular al proceso impulsado por Estados Unidos, propiciando la acusación de la Cicig contra una gran cantidad de funcionarios, ministros, diputados y alcaldes. Hasta el momento la embajada gringa y la oligarquía han logrado sortear la marea de protestas, conteniéndolas dentro de los límites del respeto al "orden constitucional" y un comportamiento pacífico, y sobre todo, encauzándolas hacia el proceso electoral, e impulsando reformas al sistema político, pero solo las que necesitan para que todo funcione según sus intereses.

Las protestas desde un inicio fueron convocadas por pequeños grupos anónimos, utilizando las redes sociales, bajo la regla de no discursos, no tarimas, no partidos políticos implicados. En las protestas ha predominado lo que podemos llamar capas medias urbanas: profesionales, pequeños comerciantes, estudiantes, amas de casa, desempleados; los trabajadores asalariados, con excepciones, han participado a título individual, sin organización. Uno de los grupos impulsadores, #RenunciaYa, estaba integrado por personas de 24 a 55 años, un diseñador, una galerista, un estudiante de derecho, una empresaria de bienes raíces, etc.

Algunos analistas han asemejado estas movilizaciones a las "revoluciones de colores" impulsadas por Estados Unidos en países con gobiernos que no son de su agrado. Consideramos que si bien hay un plan del imperialismo en el socavamiento del gobierno de Pérez Molina, la movilización de masas ha tenido su propia dinámica autónoma. Lo cierto es que las capas medias, en términos generales, impusieron su sello a las protestas, realizándolas los días sábado por la tarde para no perturbar la economía, rechazando liderazgos visibles y enfatizando su característica de pacíficas, que no quiere decir otra cosa que el compromiso de respetar el orden y la ley.

La negativa de la Asamblea Social y Popular a encabezar las luchas

Las organizaciones sindicales, campesinas, indígenas y populares, a pesar de haber logrado una instancia de coordinación en la Asamblea Social y Popular (ASP), no tuvieron la voluntad política de ponerse a la cabeza de las protestas y plantear claramente sus reivindicaciones sociales a la par de las demandas contra el corrupto régimen político. Esto a pesar de reclamar correctamente la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente, y de no pocas marchas, manifestaciones y bloqueos de carreteras que fueron realizados. La dirigencia de la ASP prefirió siempre acomodarse aliándose a grupos pequeño burgueses como universidades, ongs o lo que se conoce como "organizaciones de la sociedad civil". Resulta inexplicable en esta coyuntura, que la ASP no hiciera unidad de acción con otras organizaciones populares que se movilizaron independientemente, como el bloque Codeca, Cenoc, Uvoc y el Sindicato del Hospital General San Juan de Dios.



Consideramos que ha sido este error garrafal de la dirigencia del movimiento popular el que ha conducido a los actuales resultados electorales. El otro error fue el de las coaliciones de izquierda que se presentaron a las elecciones (CPO-Convergencia, y Urng-Winaq), que no propusieron candidaturas conjuntas de dirigentes y luchadores populares, para enfrentar la maquinaria de los partidos burgueses. El resultado de estos errores fue la ausencia de una alternativa popular, de los oprimidos y explotados, que tomara la delantera, tanto en las calles y plazas, como en las urnas, con propuestas tendientes a transformar el sistema político y social en su conjunto. Por ello predominó el voto de castigo a los políticos corruptos, en primer lugar contra Baldizón y Lider, que fueron vistos como la continuidad del podrido sistema político. El electorado, centrado en la denuncia contra el gobierno del Partido Patriota, decidió votar por el recién llegado a la política, que se presentó como "ni ladrón ni corrupto".

Por un plan de lucha unificado de las organizaciones populares

Ahora, con Baldetti y Pérez Molina encarcelados y el gobierno del PP destruido, las capas medias urbanas se han quedado sin banderas. Las protestas se han reducido al mínimo: 200 personas el sábado 12 según los medios, y un máximo de 100 que pudimos observar el 19, ya entrada la tarde.

Es el momento de que las organizaciones campesinas, indígenas, sindicales y populares hagan un balance y elaboren un plan de lucha para el próximo período, que tenga como punto central la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente popular e inclusiva, media vez se haga una profunda reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos que la democratice al máximo. El vacío que están dejando en las calles las capas medias urbanas deber ser ocupado por los campesinos, indígenas, trabajadores, estudiantes, jóvenes y mujeres que planteen sus más sentidas reivindicaciones sociales y políticas.

Por Germán Aquino

SISTEMA PRIVADO, O "MIXTO", NO GARANTIZAN UNA PENSIÓN DIGNA

Producto de las políticas neoliberales, muchos servicios, activos o bienes del Estado pasaron a manos privadas. Los fondos de pensiones no fueron la excepción. En su momento, los trabajadores tuvimos que cargar los efectos negativos de dichas privatizaciones. Estas se presentaron como la mejor salida ante la crisis del sistema de seguridad social, pero años después podemos ver el fracaso de las políticas neoliberales que permitieron la especulación con el dinero de las pensiones.

Según Salvador Arias, en catorce años de privatización de las pensiones, la clase trabajadora ha tenido que pagar "un costo de $1,358 millones solo por administrar los ahorros (…) la privatización del sistema de pensiones le ha costado un total de $8,517 millones al Estado en transferencias que se han hecho hacia las AFP para que estas sean rentables... Solo en los últimos 14 años, las AFP han percibido utilidades de $252 millones (http://diario1.com/nacionales/2015/09/salvador-arias-las-afp-han-saqueado-a-los-trabajadores-salvadorenos/).

Estas cifras reflejan que la privatización de las pensiones ha sido un gran negocio para la empresa privada, ya que además de apropiarse del dinero de los trabajadores ha recibido otros fondos del Estado. ¿Si el Estado debe aportar recursos para mantener con vida los fondos de pensiones, entonces por que fueron privatizados? Es algo realmente incomprensible.

El Estado no tiene dinero para pagar las pensiones

Actualmente el gobierno del FMLN enfrenta problemas con el pago de pensiones asumidas en el viejo sistema de pensiones. "El Ministerio de Hacienda asegura que no tiene dinero para pagar las pensiones mínimas de las personas que no logran cotizar 25 años pues no percibe ningún flujo".

Para lo solventar esta problemática, el gobierno del FMLN, después de muchas vacilaciones, ha presentado una extraña propuesta de reforma al sistema de pensiones: "… este pago de la pensión mínima le genera al Gobierno un gasto por



$6,346.18 más otro gasto por $7,731.49 que tiene que cancelar por beneficios subsidiados al nuevo sistema privado, que dependen de una serie de cambios legales que se hicieron desde 1998 a la fecha. Las contribuciones que se realicen al pilar de reparto (sistema público) permitirán financiar parte de las obligaciones del Estado con los actuales pensionados, lo cual contribuirá de manera positiva a la sostenibilidad fiscal…" (EDH. 8/09/2015).

Los trabajadores que laboraron en décadas anteriores aportaron los recursos financieros para el pago de su pensión, lo que debe haber generado ganancias. Pero es dinero se ha esfumado en la especulación capitalista. El gobierno del FMLN está en la obligación de retribuir ese dinero pagando una pensión que permita al jubilado vivir dignamente. Es inadmisible que ahora el Estado afirme que no tiene dicho dinero. Los administradores de los fondos de pensiones, es decir, el sector privado deben rendir cuenta sobre el manejo del dinero de las pensiones. El actual gobierno del FMLN debe buscar los mecanismos de compensación para que no sean los trabajadores a punto de jubilarse quienes paguen los altos costos de la privatización.

Primero los gobierno areneros y ahora el gobierno del FMLN han puesto en riesgo el pago de las pensiones de los trabajadores jubilados, y de los que se van a jubilar en el futuro inmediato.

Sistema mixto: un zarpazo a los fondos de pensiones

El gobierno del FMLN ha presentado una propuesta de creación de un nuevo sistema de pensiones, el cual funcionaria de forma mixta (Estado-privados), lo que permitiría que el sistema privado continuara funcionando, pero incorporando nuevamente el Estado. De esa forma quienes "…ganen hasta $484 de sueldo, coticen en el sector público, y quienes ganen más de ese monto coticen por $484 al sector público y la diferencia la coticen al sector privado…"(LPG 5/09/20515).

Las privatizaciones de las pensiones favorecieron a los bancos y grupos financieros. Ahora estamos ante un escenario parecido, con respecto a la Administración del Fondo de Pensiones (AFP). Según el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, las AFP continuarán administrando los dineros del fondo público de pensiones "…Sin embargo, eso dependería de lo que cobrarían al Estado por la administración de los recursos que se coticen en el sector público…" (LPG 5/09/20515). Las ganancias generadas por la administración de dichos fondos son millonarias, algo que no despreciaría ningún empresario, sea de la rancia burguesía o de la burguesía naciente ligada al gobierno. Esta reforma obligaría a las AFP a negociar una parte de las ganancias.



Organizaciones sindicales critican nuevo sistema de pensiones

El respaldo dado por muchas organizaciones al actual gobierno del FMLN, no impedido que estas muestren su apatía o rechazo a la propuesta de nuevo sistema de pensiones. Representantes del Comité de Trabajadores en Defensa de los Fondos de Pensiones (COMTRADEFOP) consideran que " …el plan Cáceres no tendrá beneficios para los salvadoreños sino solo para las finanzas públicas. De acuerdo con sus cálculos, más del 55 % de los cotizantes del actual sistema privado tendría que entregar todos sus ahorros (cotizaciones) al nuevo sistema de reparto que propone crear el ministro, y que usaría el Gobierno para pagar sus gastos corrientes. Además, cada mes, las cotizaciones de los afiliados, alrededor de $41 millones, ingresarían a las arcas del Estado. En teoría, este dinero sería utilizado para pagar las pensiones de quienes ya se han jubilado y los compromisos de pensión mínima que el Estado tiene actualmente. "El sistema no es solidario. Nos está igualando a todos para tener una pensión mínima, porque el Estado solo garantiza la pensión mínima"… el plan Cáceres respondería solo a intereses fiscales, es decir, obtener dinero para cumplir con los pagos del Estado. "Alguien quiere limpiar las finanzas públicas y luego aparecer en la banca extranjera para seguir prestando…" (EDH. 11/09/2015)



Por su parte Roger Gutiérrez, secretario general de la Federación de Asociaciones y Sindicatos Independientes de El Salvador (FEASIES), manifestó "… que el principal problema que ven a dicha iniciativa es la pensión básica de $207 mensuales. "¿Quién vive con eso?", recordando que la canasta básica tiene un costo cercano a los $484 en el país." (EDH. 11/09/2015). Las organizaciones sindicales deben mantener su independencia de clase con respecto al gobierno y continuar luchando en defensa de los derechos de los trabajadores.

Universalidad de la pensión básica

En el contexto de la discusión del sistema de pensión mixta, Medardo González, Secretario General del FMLN, confirmó el apoyo a la propuesta presentada por el Ministro de Hacienda, y que dicho sistema de pensiones consistiría en que una parte los fondos los recibiría el Estado y otra las AFP.

González señaló además que "…la posición del FMLN es tener un sistema mixto que garantice por fin justicia, en donde el Estado tenga los ingresos de pensiones suficientes para pagar las pensiones que el pueblo necesita que le paguen… Agregó que esto quiere decir, que se iniciará también un proceso hacia la universalidad de la pensión básica… "(EDH. 14/09/2015).

Como bien lo ha dicho, el actual sistema de pensiones es un fracaso ya que no garantiza una pensión justa. Respecto a la universalidad de la pensión básica, es un hecho que todas las personas mayores de edad deben tener acceso a una pensión básica, independientemente hayan cotizado lo suficiente o no. Es responsabilidad del Estado garantizarla. Estos fondos deben salir de las ganancias de los empresarios, esa es la mínima responsabilidad social que deben tener, pero el actual gobierno solo quiere cargar los costos de la seguridad social sobre los hombros de la clase trabajadora.

ARENA y su falacia

Actualmente ARENA, desde la oposición, busca presentarse como la protectora de la clase trabajadora, exigiendo una mayor rentabilidad de los fondos de pensiones, mostrándose en contra de la propuesta de sistema mixto de pensiones presentada por el gobierno del FMLN. Al respecto, Milena de Escalón, de ARENA, señaló no conocer "… en detalle la moción del Gobierno, pero vaticina desde ya que lo que buscan es tener fondos disponibles para "tapar el hoyo fiscal" que tiene la administración del presidente Salvador Sánchez Cerén… Ahora quieren regresar a tener un 'cuchubal' donde meten todo en un hoyo negro y después ese hoyo negro se queda vacío, porque lo usan para necesidades del Gobierno y vuelven a tener problemas". ARENA no se preocupa verdaderamente por la clase trabajadora, más bien busca asfixiar financieramente al gobierno del FMLN, como parte de su estrategia de recuperar el poder.

Por una pensión justa

El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) considera que el actual sistema de pensiones, y las propuestas de reformas al sistema de pensiones presentadas por el Ministro de Hacienda, no garantizan una pensión que cubra las necesidades básicas de las personas jubiladas. Por ello llamamos a todas las personas jubiladas, a luchar y exigir una digna pensión de acorde al costo de la vida. Asimismo, llamamos a todas las organizaciones sindicales o no permitir que el gobierno haga uso de los fondos de pensiones para sufragar gastos. El PSOCA considera que toda reforma del sistema de pensiones debe pasar por la aprobación de la clase trabajadora, por lo cual el gobierno debe someter a votación de la clase trabajadora dichas reformas. Debemos exigirle al gobierno que respete y garantice el fondo de pensiones.

CONFLICTO SANGRIENTO POR TIERRAS INDÍGENAS EN LA COSTA CARIBE.



Por Sebastián Chavarría Domínguez

A finales de agosto se produjeron dos muertos, en la zona de Wawa Esperanza, Región Autónoma del Caribe Norte (RACN). A inicios de septiembre recrudeció el enfrentamiento entre indígenas misquitos y colonos que han invadido los territorios indígenas.

La tensión por las tierras ha originado enfrentamientos militares entre indígenas y colonos. Recientemente, los indígenas quemaron 18 viviendas de colonos y estos respondieron atacando a balazos a las comunidades, lo que originó varios muertos. El 14 de Septiembre murió en un tiroteo el dirigente de YATAMA, Mario Leman Müller. YATAMA responsabiliza al Ejército y la Policía, pero estos afirman que fueron atacados. En mar de acusaciones mutuas, la violencia aumenta en la costa caribe de Nicaragua, teniendo como contexto el conflicto por la propiedad de las tierras indígenas.

El origen del conflicto en la costa caribe

La anexión de la Mosquitia (extenso territorio de la nación misquita que abarcaba la costa caribe de Honduras y Nicaragua) al territorio nicaragüense, en 1894, se produjo con el apoyo militar de los buques de la marina de los Estados Unidos. La Convención Misquita, producto de la anexión, planteo el problema de la autonomía de los indigenas: "Todas las rentas que produzca el Litoral Mosquito serán invertidas en su propio beneficio reservándose así la autonomía económica, pero dichas rentas serán colectadas y administradas por 10 empleados fiscales del Supremo Gobierno".

La autonomía estaba implícita, aunque limitada y controlada por el gobierno central. No se mencionaban los territorios indígenas, pero el problema de la propiedad de las tierras comenzó a tener mucha importancia, por las riquezas naturales de la costa caribe.

En Marzo de 1895 se aprobó una ley que permitía la venta de los territorios comunales para fomentar la instrucción de los indígenas. Esta disposición fue retomada en 1906 con la Ley de Comunidades Indígenas. En 1963, bajo la dictadura somocista, la Ley Agraria dispuso la desarticulación de la propiedad comunitaria para crear cooperativas agrícolas. Durante todo el siglo XX, toda la legislación tendía a destruir la base material de las comunidades indígenas: las tierras comunales.

Bajo la revolución sandinista (1979-1990) se cometieron grandes atropellos contra las comunidades indígenas, factor que posibilitó que misquitos, sumus y ramas engrosaran las filas del ejército contra. En 1987, la Dirección Nacional del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) comprendió la magnitud de sus errores, y dio marcha atrás aprobando la Ley No 28, o Estatuto de la autonomía de las regiones de la costa atlántica de Nicaragua, creando los gobiernos regionales autónomos. No obstante, el reglamento de dicha Ley se aprobó hasta octubre del año 2003.

Aunque la Constitución y las leyes protegen sus derechos, y los indígenas pueden elegir los gobiernos autónomos, en la realidad siguen sojuzgados económicamente, al grado que, a pesar de las riquezas naturales, las zonas de extrema pobreza están ubicadas dentro de las regiones autónomas.

La Ley No 445

Para comprender lo que ocurre en la costa caribe, tenemos que diferenciar a estas comunidades indígenas, que conservan tradiciones, lenguaje y formas de organización social comunal, de las comunidades indígenas del pacifico y centro (Subtiava, Monimbó y Sébaco), las cuales se encuentran en avanzado estado de disolución.

Las reducidas comunidades indígenas de Matagalpa y Jinotega, por ejemplo, aunque conservan todavía tierras comunales, viven del alquiler de las mismas, algo que no ocurre en la costa caribe.

En el año 2003 la Asamblea Nacional aprobó la Ley No 445, consagrada a demarcar y titular los territorios indígenas en la costa caribe, una reivindicación histórica, creando la Comisión Nacional de Demarcación y Titulación (CONADETI).

Sin embargo, al analizar en detalle dicha ley, queda claro que estaba destinada a proteger con mayor énfasis los títulos de propiedad otorgados bajo la reforma agraria sandinista (1979-1990), cuyos beneficiarios no necesariamente eran indígenas, sino combatientes provenientes de otras zonas de Nicaragua.

El artículo 36 de la Ley No 445 ordenaba que "El tercero que posea título agrario en tierras indígenas y que ha ocupado y poseído la tierra protegida por este título, tiene pleno derecho de continuarla poseyendo. En caso que pretenda enajenar la propiedad, deberá vender las mejoras a la comunidad".

Este es el origen del malestar indígena. Los colonos tienen igual derecho de posesión. La invasión de colonos, en las últimas décadas, los convierta casi en la población mayoritaria dentro de los territorios indígenas.

Milicias indígenas y milicias de colonos

Tanto los colonos como los indígenas



saben que el tiempo se está agotando, porque viene la fase de titulación de las tierras de los territorios indígenas. El largo historial de conflictos entre estos dos sectores, ha originado la creación de milicias en ambos bandos, quienes se acusan mutuamente de ataques traicioneros, y por ello proceden ambos a organizar la autodefensa.

Estos combates ya han producido muertos en ambos bandos, agudizando los enfrentamientos en los meses de agosto y septiembre de este año.

La visión crítica de URACCAN

En una extensa entrevista al diario digital La Trinchera de la Noticia, Cyril Omeir, secretario general de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense (URACCAN), expone el punto de vista de los costeños en torno al conflicto armado:

"El gobierno ha demarcado 22 de las 23 territorios indígenas y ha entregado títulos. El problema es que el proceso de demarcación tiene cinco etapas. La quinta etapa es el saneamiento, pero lo que ha pasado es que entregan los títulos, pero no llegan a la quinta etapa que es saneamiento. En las comunidades han preguntado cuando van a comenzar el saneamiento y como no hay repuestas, entonces quieren resolver el problema con sus manos (…) El saneamiento es la tarea de analizar la condición de todo los colones que están viviendo dentro de un determinado territorio, ver quienes tienen títulos y quiénes no. Si tienen títulos, entonces ver como consiguieron esos títulos, porque cuando entro en vigencia la ley de demarcación, ley 445, a partir de esa fecha (23 de enero del año 2003), se prohíbe al Poder Judicial emitir títulos supletorios. La ley de autonomía prohíbe la venta o la hipoteca, no se puede hacer ninguna transacción con la tierra indígena. Eso es lo que está parqueado, desde el 2007 al 2011 han estado recibiendo títulos, pero no se ha dado el saneamiento, esto ha provocado que los pueblos indígenas hagan su propio saneamiento, ellos lo hacen solo, sin acompañamiento, ahí viene el problema, ellos no van a analizar, solo dicen, están viviendo en territorio indígena y ya no los quiero aquí, han quemado casas y los colonos han matado a varios indígenas". (La Trinchera 17/09/2015)

¿Qué autoridades entregan títulos?

Como se puede observar, ha continuado la entrega de títulos sin que se produzca la fase del saneamiento. Nadie responde. El resultado es que ha aumentado considerablemente la cantidad de colonos en el extenso territorio indígena, cuya población va en descenso.

Cyril Omeir afirma categóricamente que "en los últimos años ha habido prácticamente una invasión de colonos que vienen de otros departamentos y están destruyendo todo el bosque y la tierra que pertenece al pueblo indígena (…) este problema escapa del control de las autoridades, los consejos regionales deberían estar al frente de este problema, a estas alturas deberían de estar tratando de mediar en esta situación para buscar una solución, (…) desde hace tiempo se está pidiendo que traten de parar la invasión de las tierras, pero nadie ha hecho caso (…) los indígenas no tienen la posibilidad de comprar armas (…) tanto el Ejército como la Policía han tomado una posición bastante pasiva en esta situación. (…) Es peligroso que quieran regar la idea de que el Ejército es el que se está involucrando con más violencia. Hay una pérdida de control y no sabemos a quién responde la gente armada, eso es un problema. ¿Quién les está dando armas? Quien está detrás de que la gente tome armas para defender sus tierras, no lo sabemos. El gobierno debe involucrarse en esto (..)" (Ibid)

El sentimiento generalizado entre los indígenas es que detrás de los colonos están sectores de la alta oficialidad del Ejército y la Policía, interesados en la explotación de los bosques y la minería.

Gobierno responsabiliza a dirigentes de YATAMA

En el momento de conflictos, los indígenas cierran filas con sus antiguas organizaciones, entre ellas YATAMA, que fue aliada del FSLN en las elecciones del 2006 y 2011.

El gobierno rompió el silencio con las declaraciones del presidente Daniel Ortega, quien afirmó: "Hay familias que son desmovilizadas por estafadores que contactan a los dirigentes de las comunidades que les venden la propiedad provocando un conflicto legítimo (…) Es un problema que se debe resolver con los pastores y líderes religiosos en coordinación con la autoridades e instituciones". (http://radionicaragua.com)

Días después, la Asamblea Nacional, por iniciativa de la bancada sandinista, con mayoría de 62 votos procedió a despojar de la inmunidad al diputado Brooklin Rivera, histórico dirigente de YATAMA, a quien responsabilizaron de la venta de tierras comunales. La desfloración es un primer paso para el procesamiento criminal de Rivera.

Comisión Independiente de Investigación

La confusión creada en relación al tiroteo del 14 de septiembre, que produjo la muerte de Mario Leman Müller, y las denuncias de que Brooklyn Rivera es "traficante de tierras", deben ser aclaradas.

Por ello, desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) demandamos la formación de una comisión de investigación independiente, conformada por las autoridades del Consejo Regional, la municipalidad, el Consejo de Ancianos y con representación de las organizaciones indígenas afectadas, como es el caso de YATAMA, para que proceda dilucidar, a la mayor brevedad posible, quienes son los responsables del asesinato de Mario Leman Müller, y si es cierto que los dirigentes de YATAMA son los responsables de la venta de tierras comunales.

Solucionar el problema de la tierra

El gobierno de Daniel Ortega debe conformar una comisión de alto nivel que dialogue con las organizaciones indígenas y con los colonos.

Dado el nivel de violencia, el COSEP y las Iglesias Católica y Evangélicas están planteando la necesidad de un dialogo de los sectores en conflicto. Nuestro llamado es diferente. Si bien es cierto que llamamos a las milicias de colonos y las milicias indígenas, a parar en el enfrentamiento fratricida, entre dos sectores en extrema pobreza, la solución la debe dar el gobierno. El gobierno debe respetar los convenios para demarcar y titular los territorios indígenas, pero de igual manera debe dar respuesta a la necesidad de tierras por parte de los colonos.

El Ejército y la Policía no deben criminalizar la protesta indígena, deben de abstenerse de presionar con su presencia a los sectores en conflicto. Cuando nos referimos a dialogo de los sectores en conflicto, creemos conveniente convocar a una conferencia de indígenas y colonos donde se ventilen de manera pública los orígenes de este problema que está ligado a la propiedad de la tierra. Nuevamente se pone a la orden del día la necesidad de una revolución agraria en Nicaragua.

LOS JUEGOS DE PODER Y LA CRISIS DE MIGRANTES

Por Leonardo Ixim

El drama de la inmigración masiva que viene ocurriendo en el Mediterraneo y los Balcanes, con el niño sirio encontrado muerto en las costas italianas, los cuerpos de una decena de migrantes en una carretera austriaca o la violencia suscitada en la frontera húngaro-serbia cuando las autoridades del primer país cerraron esa frontera para detener el movimiento constante de refugiados, creando escaramuzas entre la policía y los refugiados, muestran la tragedia del capitalismo de nuestros días.

Ya desde hace años a través del Mediterráneo se dan oleadas de migrantes, y esta es solo una en el constante flujo, en la medida en que se agudizan los conflictos en Africa y Oriente Medio. Recordemos que hace tan solo unos meses, en los enclaves españoles de Ceuta y de Melilla hubo intentos masivos de migrantes africanos para entrar a ese territorio español enclavado en el norte de Marruecos. Posteriormente, con el conflicto libio comenzó otra oleada de barcos cargados de personas que naufragaban en las costas del sur de Italia, convirtiéndose el pequeño Estado insular de Malta, la isla italiana de Lampedusa y el lecho marino en territorios de paso, pero sobre todo en campos fúnebres para muchos migrantes que mueren en la travesía. Este año se calcula que entrarán 300 mil migrantes.



Los Juegos de Poder entre las Potencias

Las movilizaciones contra distintos gobiernos autoritarios en diversos países del Medio Oriente, desembocaron en los casos de Libia, Siria y Yemen en guerras civiles, y en el caso del primer país en la caída de Mahomer Gadaffi y la fragmentación de esta nación norafricana. La intervención de los imperialismos hegemónicos (EU, Francia y en menor medida Alemania, Reino Unido e Italia) en esas movilizaciones legítimas, espantaron tales conflictos o congelaron nuevamente el statu quo.

Estos movimientos se dieron contra gobiernos que en un momento de la historia post Segunda Guerra Mundial nuclearon una resistencia antiimperialista, pero que fueron degenerando en nuevas elites burguesas e implantando regímenes de terror. Este es el caso de los gobiernos de Gadaffi y Al Assad, que privatizaron las riquezas de estos países posteriormente a su nacionalización, por el primero y el partido Baash en el segundo, con las mismas trasnacionales imperiales que siempre desconfiaron de estos gobiernos y en el caso libio terminaron asesinando al primero. De igual forma descartaron, cuando ya no les sirvió, a Mubarak en Egipto y a los dictadores de Yemen y Túnez, y apoyaron la intervención militar Saudí en Bahrein y ahora en Yemen.

Tales rebeliones fueron cooptadas por distintos tipos de islamismo sunnita, primero moderados como la Hermandad Musulmana, al que los militares egipcios no toleraron al ser sus enemigos históricos y posteriormente por grupos más sectarios y violentos como Al-Qaeda, Isis, etc. Pero aquí hubo una falta de acoplamiento entre la política de la administración demócrata de Obama, que en un primer momento busco derrocar a Al Assad mientras se entendía con los chiitas iraquíes aliados de Irán, para después tolerarlo medianamente y combatir a los sectores sunnitas más sectarios, reafirmando su alianza con los chiitas iraquíes y con los sectores más moderados de Irán, logrando un acuerdo para la supervisión internacional del programa nuclear iraní

Decimos falta de acoplamiento, pues con los giros de la política exterior gringa, Francia, Arabia Saudita, Israel, Turquia y Catar, cada uno desde sus propios intereses en lo que respecta a reducir la influencia regional iraní, pasan de apoyar primero a la Hermandad Musulmana, apartarse de los dictados gringos -aunque estos en última instancia los tienen que acompañar- a apoyar los grupos más sectarios como Isis.

Y porque más allá de los relatos



paranoicos de la creación de estos grupos por parte de los servicios de inteligencia occidentales, lo cierto es que Isis nace de una alianza entre generales del antiguo ejército de Sadam Hussein e islámicos financiados por la monarquía saudita y catarí sobre todo, con el beneplácito de Turquía, Israel y Francia para tratar de derrocar a Al Assad y a los chiitas iraquíes que controlan el gobierno en Bagdad.

El gobierno de Enrodgan en Turquía, por mucho tiempo sostén político de la Hermandad Musulmana y con la sombra de los servicios de inteligencia francesa, se vuelven en los principales sostenes de Isis y otros grupos sectarios. Provocando inestabilidad en Iraq por un lado y el entrampamiento de la guerra civil en Siria, el debilitamiento de sus respectivos gobiernos y el fortalecimiento del terror islámico, provocando olas de refugiados sobre todo sirios, que se establecieron en campamentos en Jordania, Líbano y Turquía primero, que ahora junto a flujos de afganos, paquistaníes, kurdos, yemenitas y turcos, migran hacia Europa. Se calcula que por lo menos de Iraq y Siria han emigrado más de dos millones de personas por las guerras respectivas.

Todo este juego de redefinición de las fronteras del Levante impuestas artificialmente en 1918 por el colonialismo europeo está provocando un drama humano que le pasa la factura a la Europa civilizada. Y las agresiones saudíes contra el pueblo yemenita y turcas contra los kurdos acrecentarán estas oleadas. Por su puesto que en esta tragedia, el sectarismo chiita de Bagdad y la represión del ejército sirio sostenido por Rusia contra su población, tienen una gran cuota de culpabilidad.

El doble discurso europeo

El discurso de la Europa civilizada está puesto a prueba, la Europa de acogida de migrantes, lo que fue siempre de forma, muestra su falacia. No solo por los sentimientos xenófobos explotados por la extrema derecha de parte de sectores atrasados del pueblo europeo, que obliga a los gobiernos socialdemócratas y conservadores a imponer políticas restrictivas a la inmigración. Sino también por la voracidad de los grandes monopolios trasnacionales que abogan por la entrada dosificada de trabajadores baratos para mantener



sus cuotas de ganancias y mantener a raya los sindicatos y las exigencias de los obreros autóctonos o de origen migrante, y con ello conservar a las burocracias sindicales que encuadran las luchas obreras.

Las acusaciones de Bruselas y Merkel contra la represión desatada por Víctor Orban y la policía húngara contra los migrantes, son lágrimas de cocodrilo pues pese a que Orban es un nacionalista xenófobo y católico que chantajea a Bruselas con Moscú y se postula como la defensa de los

"valores cristianos ante la oleada islámica", sus señalamientos hacia la UE y las naciones mas ricas, sobre su responsabilidad, es real.

Pero las muestras de solidaridad vienen del proletariado y pueblo europeo, manifestaciones en Viena, Budapest, Londres, Madrid, Berlín etcétera, contra las políticas restrictivas de asilo; la adopción de migrantes en hogares de la lejana Islandia; la vía libre de los mismos gobiernos de Grecia, Macedonia, Serbia o Croacia; la entrega de alimentos y agua de las poblaciones griegas, macedonias, serbias, croatas, húngaras, austríacas a los migrantes y de turistas en las islas griegas de Lesbos y Cos, como las que nuestros hermanos centroamericanos reciben de familias mexicanas pese a la represión de las autoridades de ese país. Todo esto obliga a Berlín a proponer una distribución equitativa a todas las naciones de la UE sin que se haya tomado aún una decisión al respecto; pero diferenciando arbitrariamente entre migrantes y refugiados. Sin embargo la apuesta es siempre por militarizar aún más las fronteras y con el pretexto de combatir las mafias de trata de personas, atacar lanchas en el Mediterráneo y bombardear las costas libias si es necesario; el gobierno alemán está a la espera de que el Bundestag apruebe el uso de anfibios militares para tales operaciones.

El Psoca llama a todas las organizaciones, partidos, sindicatos, clasistas, socialistas y revolucionarios de Europa a movilizarse para derrotar las políticas intervencionistas en Medio Oriente y África. Además de obligar a los Estados a permitir la libre entrada de migrantes, que se combata a los grupos y partidos neo nazis, que se generen mecanismos para posibilitar el acceso a servicios básicos a migrantes y empleo para la clase trabajadora autóctona como de origen migrante y los migrantes recientes, reduciendo la jornada laboral a seis horas, con escala móvil de salarios y con prestaciones sociales.

A 159 AÑOS DEL TRIUNFO DE LOS INDIOS FLECHEROS EN LA BATALLA DE SAN JACINTO



Por Melchor Benavente.

La llamada "Guerra Nacional" contra los filibusteros de William Walker, aunque se libró en territorio de Nicaragua, fue en realidad una guerra centroamericana contra el expansionismo de los Estados esclavistas del sur de Estados Unidos. Las tropas nicaragüenses y centroamericanas libraron heroicas y desiguales batallas contra los filibusteros, pero en Nicaragua solo celebra una de ellas: la victoriosa batalla de la Hacienda San Jacinto, el 14 de septiembre de 1856. Veamos porque.

El vital abastecimiento de las tropas filibusteras

En agosto de 1856, un grupo de nicaragüenses "vende patria" al servicio de los filibusteros, tenían la misión de apoderarse del ganado (reses, caballos y mulas) en el llano de Tipitapa, para abastecer a los tropas de William Walker que tenían a la ciudad de Granada, como su principal centro de operaciones. Tipitapa es un llano fronterizo entre los departamentos de Granada. Masaya y Chontales, era la puerta de ingreso a Managua, viniendo desde el Norte y desde el Centro.

En esa ocasión, los mercenarios fueron vencidos por los lugareños. El General Fernando Chamorro, del desbandado ejército legitimista (conservador), se vio obligado a replegarse a la zona norte montañosa de Nicaragua, organizando el Ejército del Septentrión. Desde ahí libró una guerra de guerrillas contra los filibusteros, pero sin tener la fuerza suficiente para atacar las principales ciudades en manos de los filibusteros. Enterado de la pequeña victoria de los lugareños en Tipitapa, el general Fernando Chamorro envió desde Matagalpa la "División Vanguardia" (un puñado de soldados descalzos con rifles de mecha) al mando del coronel José Dolores Estrada, para proteger las propiedades de los finqueros nicaragüenses quienes periódicamente eran saqueados o confiscados por las tropas filibusteras.

En represalia, para reafirmar su autoridad, William Walker envió a la zona de Tipitapa, 120 soldados del Segundo Batallón de Rifleros, bien armados con rifles de repetición, al mando del coronel Edmund H. McDonald. El 29 de agosto, Byron Cole al mano de 50 soldados montados a caballo, tenía la misión de sembrar el terror entre la población campesina que apoyaba a las tropas rebeldes. Tanto el coronel McDonald como el coronel Estrada marchaban en la misma dirección, el enfrentamiento militar era inevitable.

Primer ataque contra San Jacinto

Estrada avanzó cerca del poblado de Tipitapa y se asentó en la finca ganadera San Jacinto, propiedad que los filibusteros habían confiscado a una familia de apellido Solano. Los espías de los filibusteros detectaron la presencia de Estrada en San Jacinto, entonces Walker ordenó al coronel McDonald que aniquilase a las tropas nicaragüenses. McDonald atacó las posiciones de Estrada durante la mañana del 5 de septiembre. Pero la casa hacienda de San Jacinto resultó un magnificó cuartes de defensa de las tropas nicaragüenses. Las anchas paredes de abobe contenían las balas, y los corrales de piedra eran trincheras inexpugnables

Después de casi tres horas de fuego cruzado, McDonald tuvo que retirarse hasta Granada dejando 6 soldados muertos en el campo de batalla, "quince rifles, muchas paradas, cuatro espadas, un botiquín con su correspondiente repuesto de medicinas, un estuche de cirugía, quince bestias mulares y otras tantas caballares con sus correspondientes monturas, diez botes de latas y otros muebles de menos importancia como chamarras, gorras, sombreros, cuchillos, espuelas, botas y pistolas descompuestas".

Las tropas de Estado tuvieron una baja y tres heridos. Fue una defensa exitosa pero el enemigo seguía teniendo la ofensiva estratégica.

El segundo ataque de Walker

Inconforme con los resultados del primer ataque, Walker reagrupó las fuerzas del coronel McDonald y el 12 de septiembre organizó una segunda expedición para tomarse San Jacinto. Cada batalla ganada por las tropas nicaragüenses, encendía la moral de la población que tenía la bota militar de Walker sobre su cuello.

El 13 de septiembre, el coronel Byron Colé, quien sembró el terror en la zona de Chontales, se dirigió también hacia Tipitapa al mando de 75 filibusteros,



arribando a las 5 de la mañana a la hacienda San Jacinto, cuartel defensivo de las tropas rebeldes nicaragüenses.

El asalto de los filibusteros fue intenso y sostenido. Una de las compañías de los filibusteros saltó los corrales de piedra, y llegaron a los corredores de la casa Hacienda pero no tuvieron fuerzas para resistir los ataques de las tropas de Estrada, atrincheradas dentro de la casona, obligándolas a retroceder. La batalla continuó en los corrales de piedra, donde los filibusteros estaban en desventaja.

En el ínterin, consciente de la importancia de la primera defensa del territorio en San Jacinto, el general Chamorro ordenó fortalecer la posición y el coronel Estrada recibió refuerzos de Matagalpa, llegando a reunir 160 hombres, entre ellos un contingente de indios flecheros matagalpinos. Estos se enfrentarían con arcos y flechas a los rifles de repetición de los filibusteros.

La estampida de los caballos

La batalla continuó en los corrales de piedra. Estrada ordenó atacar por los flancos. Las tropas nicaragüenses salen por la parte trasera de la casa hacienda, hacen un movimiento circular, se internan en el bosque y atacan a los filibusteros por la retaguardia, causando un terrible impacto sobre las tropas enemigas. En uno de los corrales había caballos, los que se asustaron con el tiroteo y salieron en estampida. Las bestias asustadas corrieron al lado de las tropas nicaragüenses, dando la sensación que una inmensa caballería reforzaba a las tropas nicaragüenses. Un factor casual que influyó decisivamente en la batalla. El resultado fue la dispersión y desesperación de los filibusteros, quienes al fragmentarse se convirtieron en pequeños grupos que fueron fácilmente aniquilados por las tropas nicaragüenses sedientas de venganza.

Al coronel Byron Colé, el mismo que firmó el contrato para traer a los filibusteros a Nicaragua, lo capturaron vivo en la vecina hacienda San Ildefonso, donde fue fusilado en el acto. El Ejército del Septentrión sufrió 28 bajas entre heridos y muertos, y los filibusteros 35 muertos y 18 prisioneros.

La pedrada de Andrés Castro.

En medio de la batalla en los corrales de la hacienda San Jacinto, el soldado Andrés Castro (ascendido posteriormente a Sargento) al no tener el tiempo suficiente para cargar el fusil de chispa, ante el asalto de un filibustero, optó por derribarlo de una pedrada, convirtiéndose en un héroe, el símbolo de la lucha desigual de un soldado descalzo y mal armado contra un filibustero bien armado.

Hasta el año 1955, la gesta del soldado Andrés Castro había pasado inadvertida por los historiadores, pero un grupo de intelectuales se dio a la tarea de divulgar la simbólica pedrada que derribó al filibustero.

La increíble valentía de los indios flecheros de Matagalpa

La gesta libertadora de los indios flecheros de Matagalpa, durante la batalla de San Jacinto, ha sido recogida de manera fragmentada por los historiadores, en una época que despreciaban al indio

El historiador Jerónimo Pérez, testigo de la guerra contra los filibusteros, confirma escuetamente que los indios de las cañadas de Matapalo y Yucul, en el departamento de Matagalpa, dieron refugio al general Fernando Chamorro y su gente que venían huyendo ante el avance de los filibusteros en Chontales (Pérez. 215)

La crónica del sargento Carlos Alegría, quien participó en la batalla de San Jacinto, ratifica brevemente que “El 11 (de septiembre de 1856) llegó una división de sesenta indios con flechas al mando del Mayor Don Franco Sacasa (…) que fueron tan útiles a la jornada del 14” (citado por Alejandro Bolaños Gayer).

El historiador Sofonías Salvatierra en su texto “La Guerra Nacional”, cita al presbítero Ramón Ignacio Matus, en un artículo publicado en El Comercio del año 1926, en el que reconoce que “el Ejército de Estrada estaba casi todo armado de flechas contra otro armado de fusiles”.

Los indios flecheros de Matagalpa tienen una largo historial de combate. En las guerras civiles posteriores a la independencia, en 1821, participaron al lado de los conservadores. Lo mismo ocurrió durante la invasión a León, por las tropas del general salvadoreño, Francisco Malespín (1844-1845) y durante la guerra civil de 1854, que abrió las puertas a la invasión filibustera. En 1856 se opusieron ferozmente a que el oficial filibustero Fry entrara a la ciudad de Matagalpa. Y el 30 de marzo de 1881, tres mil indios flecheros de rebelaron contra el prefecto Gregorio Cuadra, bajo la presidencia de Joaquín Zavala, ambos conservadores.

Reconocimiento tardío que niega la guerra centroamericana

Un problema que tienen todos los gobiernos de Centroamérica, es que niegan su propia historia. Después de la expulsión de las tropas de Walker, producto de la unión de los ejércitos de Centroamérica, cada una de las oligarquías se dedicó a escribir su propia versión de los hechos, creando héroes y mitos con base a sus necesidades.

Así, solo para citar un ejemplo, la oligarquía costarricense, tuvo que crear a Juan Santamaría como un héroe nacional de la lucha contra los filibusteros, aunque la mayoría de los actuales historiadores dudan de su existencia real.

Algo parecido ocurrió en Nicaragua, con la batalla de San Jacinto, la única batalla que ganaron las tropas nicaragüenses, en momentos en que arreciaba el avance de las tropas centroamericanas sobre Masaya y Granada para cercar y aniquilar a Walker. El sacrificio de los indios flecheros fue ocultado por los historiadores de la época, a pesar que fueron el grueso de las tropas que se enfrentaron y derrotaron a los filibusteros en San Jacinto.

En Septiembre del año 2012, la Asamblea Nacional de Nicaragua, mediante la Ley No 808, declaró “Héroes de la Batalla de San Jacinto a los sesenta Indios Flecheros Matagalpas que participaron en la Guerra Nacional, cuya acción contribuyó, al triunfo de los nicaragüenses contra los filibusteros al mando de William Walker”.

Un reconocimiento justo pero tardío, que sigue llamando “guerra nacional” a la épica guerra centroamericana contra los filibusteros de William Walker. ■

UN GOBIERNO DE TRANSICIÓN A LA MEDIDA DE LA OLIGARQUÍA Y EL IMPERIALISMO

Por Úrsula Pop

La estrepitosa caída del expresidente Otto Pérez Molina, capturado por su implicación en la red de defraudación aduanera "La Línea", condujo a que el 3 de septiembre asumiera la presidencia Alejandro Maldonado Aguirre, que había reemplazado desde mayo en la vicepresidencia a Roxana Baldetti, quien guarda prisión por las mismas causas que Pérez Molina.

Maldonado Aguirre es un viejo político ultra conservador, cuya escuela fue la juventud del anticomunista Movimiento de Liberación Nacional (MLN), que aglutinaba a la extrema derecha guatemalteca. Junto a un grupo de jóvenes profesionales, Maldonado se separó del MLN y evolucionó políticamente a posiciones de centro derecha. Fue ministro de educación durante el gobierno militar de Arana Osorio (1970 – 1974). Fue diputado a la Asamblea Nacional Constituyente en 1984. Más adelante fue magistrado de la Corte de Constitucionalidad en los periodos 1986 -1991, 1996 – 2001, y 2006 a la actualidad. En ese lapso de tiempo atrasó las investigaciones sobre el asesinato de Monseñor Gerardi, impidió la extradición del general genocida Ríos Montt a España para ser juzgado y votó por la anulación de la sentencia por genocidio del mismo personaje en 2013.

Maldonado es, entonces, una ficha apropiada de la oligarquía y el imperialismo para poner un poco de orden en el sistema político luego de la aparatosa caída del gobierno del Partido Patriota. Maldonado ha calificado su gobierno de "gobierno de salvación", y anunció que hará énfasis en los temas de salud, educación y medio ambiente.

La burguesía ya empezó a sugerir agenda al nuevo gobierno. Jorge Briz, presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), propuso en una entrevista reciente: "La función primordial de este gobierno, que llaman de "transición", es ordenar la casa y combatir la corrupción en las distintas instituciones del Organismo Ejecutivo. Adicionalmente a ello, promover eficiencia y procesos eficientes y transparentes en compras y contrataciones. Revisar quiénes están efectivamente trabajando en el Gobierno para suprimir plazas fantasmas, corregir grandes ineficiencias y revisar los pactos colectivos de trabajo." (Siglo XXI, 16/09/15). Con la certeza de que con el nuevo gobierno finalizará la crisis política iniciada en abril, los empresarios nacionales y extranjeros empiezan a retomar confianza. El vicepresidente de la Cámara de Comercio Guatemalteco Americana (Amcham) declaró: "Durante estos meses hubo gran incertidumbre por parte de las empresas de Estados Unidos, pero ahora cada vez están más convencidos de que el mensaje de fortalecimiento del Estado y las instituciones, que constantemente le repetimos, es cierto", y anunció la llegada a finales de septiembre de una delegación de 12 franquicias estadounidenses (El Periódico 11/09/15).



Y la certeza jurídica anhelada por los capitalistas se empieza a concretar. El 17 de septiembre la Corte de Constitucionalidad por unanimidad declaró inconstitucionales el aumento a los impuestos de la minería y el cemento y la creación de un tributo a la telefonía, que habían sido aprobados en noviembre del año pasado para financiar el presupuesto gubernamental 2015. La alianza de los partidos Patriota y Líder había logrado la aprobación de este paquete de impuestos, que fue objeto de diez acciones de inconstitucionalidad por parte de cámaras empresariales, empresas, diputados y personas individuales. El Estado esperaba recaudar Q 2,727.3 millones con estas medidas. El impuesto a la telefonía quedó en suspenso en diciembre de 2014 por una acción de amparo. En el primer semestre del año el impuesto al cemento permitió recaudar Q 166.4 millones. El Ministerio de Finanzas estima que por la decisión de la CC se dejará de recaudar Q 1,844 millones. Al finalizar el gobierno de Pérez Molina lo primero que hace la oligarquía es derogar las disposiciones que le afectan económicamente, al igual que hizo cuando terminó el gobierno de su adversario Alfonso Portillo.

En cuatro meses que le restan de ejercicio, no son muchas las reformas que podrá realizar Maldonado, no solo por el escaso margen de tiempo, sino porque no tiene una bancada que le apoye en el Congreso. Por lo pronto ha empezado a rodearse de personajes conservadores para hacerse cargo de los ministerios, como el empresario de la educación Rubén Alfonso Ramírez en el Ministerio de Educación. Su vicepresidente, Juan Alfonso Fuentes Soria, nombrado a mediados de septiembre por el Congreso, es un ex rector moderado de la Universidad de San Carlos, y ya tiene el beneplácito de la Embajada gringa.

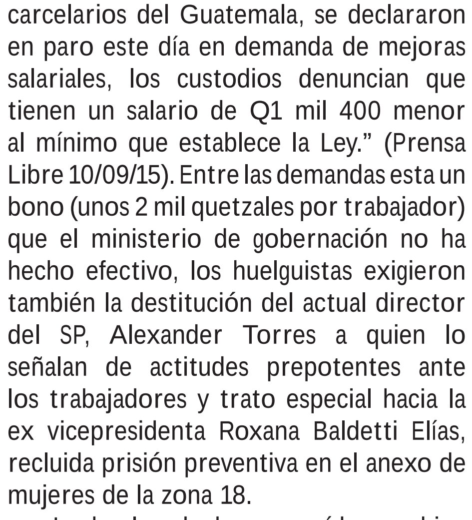
Frente a este gobierno que pretende estabilizar el statu quo, el movimiento popular debe retomar la lucha por la reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, apuntando a la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente popular e incluyente.



LAS HUELGAS DE LAS Y LOS GUARDIAS DEL SISTEMA PENITENCIARIO (SP)

Por Juan P. Castel

El pasado jueves diez de septiembre se registró el inicio de la huelga de los guardias del sistema penitenciario, que bloquearon la entrada al centro de reclusión más grande del país, el ubicado en la zona 18 capitalina; mas 4000 miembros de la fuerzas del orden de los centros de reclusión ubicados en la capital y otros en el interior del país tomaron parte en la huelga. La noticia fue trasmitida por la prensa burguesa a media mañana. "Unos cuatro mil guardias del sistema penitenciario de los 22 centros de carcelarios del Guatemala, se declararon en paro este día en demanda de mejoras salariales, los custodios denuncian que tienen un salario de Q1 mil 400 menor al mínimo que establece la Ley." (Prensa Libre 10/09/15). Entre las demandas esta un bono (unos 2 mil quetzales por trabajador) que el ministerio de gobernación no ha hecho efectivo, los huelguistas exigieron también la destitución del actual director del SP, Alexander Torres a quien lo señalan de actitudes prepotentes ante los trabajadores y trato especial hacia la ex vicepresidenta Roxana Baldetti Elías, recluida prisión preventiva en el anexo de mujeres de la zona 18.



La huelga de brazos caídos se hizo manifiesta en pleno corazón del centro cívico, ya que el traslado efectuado diariamente desde las 5:00 de la mañana de reos para las diligencias judiciales ante la justicia en la torre de tribunales fue impedido por los huelguistas, dejando 50 audiencias suspendidas, afirmó el Ministerio Publico (MP). Junto a esto los trabajadores del SP cerraron las cárceles impidiendo los horarios de visita a los reos (unos 19 mil en todo el país). Debido a una organización desigual, hacia la tarde ya se reportaba que a la huelga se unían los guardias de las Granjas Penales "Canadá" en el departamento de Escuintla y la de Cantel, en Quetzaltenango, mientras otra, la de "El Boquerón" en el departamento de Santa Rosa, funcionaba con normalidad.

En la cárcel de reclusión para mujeres Santa Teresa ubicada en la zona 18 de la ciudad capital, las guardias de este centro penitenciario denuncian los privilegios que tiene la ex vicepresidenta Roxanna Baldetti, que cuenta con una habitación amplia, que anteriormente era utilizada por la administración del centro carcelero. Junto a esto, como todo el paisaje de un país con sus contradicciones, luces y sombras, mientras las otras presas y las mismas guardias no cuentan con enseres para cubrir los tres tiempos de comida, la ex vicepresidenta cuenta con vehículos y sus mandaderos personales para cubrirle cualquier clase de necesidad. "A ella la tratan como que fuera una princesa y a nosotras no, que somos las que trabajamos", le dijo una de las agentes que custodia en Santa Teresa, con el rostro cubierto a la agencia Española de Noticias (EFE).



La Actual ministra de gobernación Eunice Mendizábal, que enfrenta la ya crónica crisis en la Policía Nacional Civil (PNC) respondió así a la huelga en el SP: "En un mes aproximadamente se haría efectivo el pago, en ningún momento dejaremos de cumplir el ofrecimiento", mientras la ministra enviaba a efectivos a las puertas del centro penitenciario de la zona 18 como medida de diálogo. Al cierre de la jornada las medidas de fuerza fueron suspendidas al ser confirmado por el viceministro de Seguridad, Elmer Sosa, que se efectuaría el pago (unos 7 millones de quetzales) y que solo debía terminar de pasar por la engorrosa burocracia estatal. Desde el "Partido Socialista Centroamericano" (PSOCA) saludamos las acciones de las y los trabajadores del SP, siempre que estas se encuadren en un nivel de lucha que levante las más sentidas demandas del gremio y que en esta no tengan injerencia los grupos paralelos que dominan las prisiones y que los y las trabajadoras desarrollen su independencia de clase codo a codo en la lucha.

La Huelga de Puerto Quetzal

El pasado miércoles 16 de septiembre los trabajadores iniciaron una huelga de tres días en la compañía estatal "Empresa Portuaria Quetzal" (EPQ) para denunciar el avance en la concesión que el Estado cedió a la compañía española conocida como Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), se oponen también a la construcción de 10 módulos en las instalaciones de la portuaria. La Huelga fue levantada el viernes 18 después que la Corte de Constitucionalidad (CC) fallara a favor de un amparo interpuesto por la burguesía organizada en "Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras" (CACIF) para garantizar los servicios de importación y exportación en Puerto Quetzal, ya que se han visto afectados por la paralización de labores desde el inicio de la paralización.

Desde el "Partido Socialista Centroamericano" (PSOCA) hemos denunciado el pacto Estatal de concesiones en EPQ como un trato que busca favorecer a la lumpen-burguesía gobernante al depredar las empresas estatales para pasarlas al control privada trasnacional.

Por Alberto Castro

LA INEFICACIA DEL “PACTO DE ATACO”

En torno al tema de la violencia en El Salvador se ha generado un aparente acuerdo político entre los dos pilares del nuevo bipartidismo, ARENA y el FMLN, que ha dado como resultado el Pacto de Ataco. Mientras los políticos hablan y habla sobre la violencia, continua subiendo el número de muertes violentas. El ’’principal’’ éxito político del consenso ARENA-FMLN, después de la firma de los Acuerdos de Paz, apunta a ser otro fracaso más que ya empezó a desplomarse.



Los pactos políticos: negociaciones y prácticas demagógicas

La firma de ’’pactos’’ es parte de una tradición de los partidos burgueses. Recordemos el Pacto de Apaneca en 1982, llevado a cabo con el claro objetivo de frenar el auge del movimiento revolucionario. Ese pacto dio cabida a la instauración de un gobierno provisional, que se repartió entre ARENA, PDC y PCN.

Después de la guerra civil, durante la administración de Calderón Sol se firmó el ’’Pacto de San Andrés’’, esa vez los firmantes eran el gobierno de ARENA y una fracción del FMLN liderada por Joaquín Villalobos, denominada Partido Demócrata (PD). Esa negociación le permitió al gobierno de Calderón Sol tener los votos necesarios en la Asamblea Legislativa para aumentar el IVA del 10 al 13%.

La localidad de Ataco, departamento de Ahuachapan, ha sido escenario donde los partidos políticos burgueses han suscrito “acuerdos”. Ahí se suscribió, el 27 de Enero del 2014, aquel ’’pacto del café’’, una alianza político-electoral entre cafetaleros y el FMLN, con la participación de Tony Saca del partido GANA.

Los principales compromisos del Pacto de Ataco

Recientemente, nuevamente en Ataco, teniendo como contexto el espiral de violencia, el pasado 27 y 28 de agosto del año 2015, ARENA, PCN, PDC, FMLN y GANA firmaron un documento conocido como Pacto de Ataco, el cual contiene 10 compromisos acordados entre el gobierno del FMLN y los partidos políticos con representación en la Asamblea Legislativa. El primer acuerdo prevé la conformación de un comité interpartidario que ’’ facilite la creación de un marco legal relativo a la prevención, readaptación, reinserción y rehabilitación’’ de los pandilleros. También acordaron estudiar la creación de un instituto de criminalística e investigación científica del delito.

No obstante, en medio de los acuerdos, salta un extraña petición de los partidos que solicitan a la Sala de lo Constitucional de la CSJ que agilice la resolución de los $900 millones para contratación de préstamos y colocación de bonos. Con esta petición, el gobierno del FMLN pretende acabar con la asfixia económica y financiar los planes para combatir a las maras, entre los cuales está la necesidad de fortalecer la FGR y PNC, así como apoyar cualquier medida que logre facilitar la implementación del bloqueo de la señal telefónica en los recintos penales.

En una parte del documento, los partidos políticos firmantes manifiestan su “compromiso respecto a la Constitución, la forma de Gobierno, el sistema político pluralista expresado por medio de los partidos políticos y al régimen de libertades”.

En el centro del pacto están únicamente ellos, los representantes de los partidos y nadie más. Un asunto tan importante, como el derecho a la vida de los salvadoreños, debe ser discutido y resuelto por toda la sociedad y no por un cúpula de dirigentes de los partidos políticos.

La participación de los trabajadores y de las organizaciones sociales es nula. Se está decidiendo el futuro y hasta la vida de quienes conforman las maras, pero no se les ha tomado en cuenta para que expresen su punto de vista.

Lo que se oculta tras los discursos

Estos acuerdos no muestran una salida para terminar con la violencia. En realidad son medidas que pretender aplastar la actividad de las maras y pandillas. El primer acuerdo no especifica como reinsertaran a los jóvenes a la vida del ciudadano común. Lo que aparenta ser un logro de entendimiento nacional entre el FMLN y ARENA sobre un tema crucial, en realidad es un compromiso que sienta bases para la firma de los próximos préstamos.

La interrogante que surge es de qué manera y hasta qué punto funcionará este pacto, que ya ha causado crisis en las filas del FMLN y de ARENA. No queda claro si es un acuerdo para luchar contra la violencia, o un acuerdo para buscar fondos con el pretexto de luchar contra la violencia. Mientras los firmantes dicen velar por la vida y integridad del pueblo, asegurando respetar la institucionalidad, están creando condiciones para golpear a las estructuras pandilleriles, sin atacar las causas sociales que originan la violencia

al mismo tiempo que porque confían en el aparato estatal para salvaguardarse como clase burguesa, y más aún cuando claramente advierten a través de sus voceros en llevar la muerte a los sectores



marginales donde tienen presencia las maras y pandillas. Es una manera de decir que fuera de ese ámbito político de relaciones bipartidistas no existe nada legal u oficial, que es ahí donde define el rumbo de millones de salvadoreños, y el destino final de la juventud organizada en maras y pandillas.

Discrepancias y coincidencias

Con el tema de la violencia cada partido político busca sacar provecho de la situación que vive el país. En realidad nadie está luchando contra el origen social de la violencia. El FMLN y ARENA se han acusado mutuamente de incumplir los compromisos firmados, al mismo tiempo que recrudece la lucha por obtener cada quien mayores cuotas de poder dentro del aparato del Estado.

El FMLN denuncio públicamente que ARENA no apoyó la exhortación a la CSJ por los $900 millones. Por su parte, ARENA sostiene que FMLN no cumple con el acuerdo de respeto. Detrás de los señalamientos verbales cada quien ha tratado de sacar provecho en las calles. La marcha convocada por la derecha el día 5 de Septiembre, deja al desnudo que la estrategia de ARENA sigue el libreto del plan imperialista de supuesta lucha contra la corrupción, a partir de la creación de una CICIES, tomando el ejemplo de la CICIG en Guatemala. La contra marcha organizada por el FMLN demuestra que el pleito por las cuotas de poder continua, pero que no hay tal acuerdo para eliminar las causas de la violencia. El Pacto de Ataco y los diez compromisos firmados por el FMLN y ARENA fue presentado como la gran solución al mal de la violencia que desangra al país, pero esto solo fue una fachada, para calmar el descontento de la población contra la ineficacia del actual gobierno.

La verdad que ARENA y el FMLN no firmaron un acuerdo para combatir la inseguridad de la población, sino un acuerdo para combatir directamente a las maras y pandillas. El único acuerdo que parece existir es el genocidio contra las maras. Es una salida militarista condenada al fracaso, como muchas otras aplicadas por anteriores gobiernos. Se ha vuelto a anteponer la represión y las masacres, sobre la prevención y reinserción. No es una casualidad que parte del Pacto de Ataco contempla la necesidad de fortalecer la coordinación entre la Fiscalía General de la Republica (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC), lo cual contempla la creación de Tribunales Especializados y Unidades Elites de la Policía, siempre con el objetivo de masacrar a las maras.



Nuevos préstamos, más endeudamiento

Para fortalecer la FGR y la PNC no hay fondos propios, por lo que requieren aprobar nuevos préstamos para financiar los planes del GOES. Las negociaciones políticas son más importantes para el gobierno, que necesita préstamos urgentes para mejorar su imagen ante los votantes. Desde la oposición ARENA acumula fuerza y ventaja, presionando cada vez más fuerte para crear una CICIES. Estamos, pues, ante el mismo forcejeo de siempre, y sin ninguna media real para combatir el origen de la violencia, que en el fondo es una repuesta errónea de decenas de miles de jóvenes que son lanzados a la marginalidad social por la crisis del capitalismo.

Entre tanto la muerte está a la orden del día

Durante el segundo fin de semana del mes de septiembre se registraron 61 muertes violentas. El GOES por su cuenta no cree que cifra disminuya a corto plazo. Más aun, advierte que aumentará, lanzando una clara amenaza contra las maras.

El Secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Eugenio Chicas, en una entrevista en el programa Hablemos Claro, de TVO, manifestó lo siguiente: “Hubo 30 asesinatos el sábado y 31 el domingo. Sentimos mucho a cualquier joven que perezca, sea o no de estructuras criminales”. Chicas cree que el número de víctimas no disminuirá “en este período”, “porque la solución no es a corto plazo. Van a haber muchas víctimas en las filas de estos grupos criminales (pandillas), porque el Estado no hará tregua”. Y confiado en la política del FMLN, Chicas expreso que los resultados de las acciones del Gobierno, en torno a la seguridad, se verán reflejados en 2016.

Esta más que claro que el aumento de número de muertes violentas es porque se está liquidando selectivamente a los cabecillas de las maras. Un arma de doble filo porque no garantiza la desaparición de las maras como fenómeno de la descomposición social. En este contexto la represión selectiva o abierta pueden genera conflictos y mayores enfrentamientos.

Desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) manifestamos nuestro rechazo a la actual salida militarista, que no soluciona el problema económico y social que genera el fenómeno de las maras. El pueblo salvadoreño debe debatir la eficacia de la actual política de masacre de las maras. Nosotros creemos que el camino correcto es diálogo entre el gobierno y las maras y pandillas, no hay otro, los demás han demostrado su ineficacia para resolver la violencia

Por Francisco Quesada

DIVISIÓN SINDICAL FAVORECE AL GOBIERNO

El bloque sindical Patria Justa (PJ) está integrado por varias organizaciones sindicales importantes que representan a miles de trabajadores del sector público, tales como la ANEP, el FIT-ICE, UPINS, SINTRAJAP, SITRAPEQUIA, SITRAP y SINAE. Los dirigentes sindicales más reconocidos de Patria justa son el vitalicio Albino Vargas y Fabio Chaves, de ANEP y FIT-ICE, respectivamente. Por su parte, el Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense (BUSSCO) está conformado por diversos sindicatos que agrupan a miles de trabajadores del sector educación, salud y otros sectores sociales, entre los cuales se encuentran, APSE, ANDE, UNDECA y diversas organizaciones sociales. En el bloque sindical BUSSCO, los dirigentes más conocidos son Luis Chavarría y Gilberto Cascante, de UNDECA y ANDE, respectivamente.

Debido a la campaña sistemática, insidiosa y violenta desarrollada por parte de los sectores neoliberales y sus medios de comunicación, en contra de los salarios, sus componentes salariales (pluses) y el empleo en el sector público, el bloque sindical, Patria Justa, recientemente publicó un comunicado en el cual planteaba dos asuntos importantes. Primero, convocaba a una "huelga general" para el mes de octubre y, en segundo lugar, le hacía un llamado a la "unidad" sindical al bloque sindical de BUSSCO.

De la "Huelga General Nacional de Grandes Dimensiones"…al Llamado a la Mesa de Diálogo

En su "Acuerdo Solemne", Patria Justa, publicado en Limón y "aprobado por unanimidad" planteaba que "El colectivo Sindical Latinoamericanista Patria Justa ha acordado el impulso de un movimiento laboral de grandes dimensiones con características de Huelga General Nacional para enfrentar la agudización de la campaña de agresión sicológica y de terrorismo ideológico en contra de la clase trabajadora del sector público, sus familias y sus organizaciones…". El "movimiento laboral de grandes dimensiones con características de Huelga General Nacional", este bloque sindical lo planteaba para desarrollar en el mes de octubre. Este llamamiento a "Huelga General Nacional", realizado por Albino Vargas, creó muchas dudas en diversos sectores sindicales y sociales, ya que este dirigente sindical nunca ha impulsado ni dirigido una "huelga general", sino que más bien, acostumbra a impulsar mesas de "negociaciones" y "diálogos" nacionales con el gobierno y las cámaras empresariales.

Al final, nadie creyó en el llamado de Patria Justa a la "Huelga General Nacional", mucho menos los neoliberales que lo tienen bien medido. Es por ello que, Eduardo Ulibarri, un neoliberal confeso, al respecto planteo que "Tras décadas de dominar la ANEP con éxito relativo (en particular su longevidad), Albino Vargas debe haber aprendido muchas lecciones. Pero hay una que, si la aprendió, decidió olvidarla: las huelgas a la ligera…". (La Nación, 18 de setiembre del 2015). Al final, ese pomposo y grandilocuente llamado a la "huelga general nacional" por parte del bloque sindical de Patria Justa, se demostró que era solamente una maniobra de Albino Vargas, Fabio Chaves y demás dirigentes sindicales, simplemente para intentar y forzar al gobierno de Solís, a instalar una mesa de diálogo, para negociar los salarios, los componentes salariales y el empleo público.

La maniobra y falso llamado a una "huelga general nacional" de Albino Vargas y Fabio Chaves, quedó desenmascarada y evidenciado, por ellos mismos!! Veamos. Fabio Chaves en un artículo escrito en el diario La Nación planteo que "Como movimiento sindical responsable, y en aras de aportar a las soluciones del país, aceptaríamos que se abra una mesa de discusión sobre este tema; sin embargo, esta discusión debe darse de forma seria, transparente y responsable para analizar objetivamente y encontrar soluciones, incluidas correcciones, que se demuestren y se puedan aplicar a los regímenes salariales del sector público". (La Nación, 11 de setiembre del 2015). Por su parte, "… Vargas y un grupo de dirigentes de Patria Justa se reunieron este lunes con el obispo de Puntarenas, Óscar Fernández, presidente de la Conferencia Episcopal de Costa Rica 8Cecor). Allí, los líderes gremiales llegaron con la petición de que la Iglesia católica intervengan en el diálogo sobre el empleo público, ya sea como como actor directo o como facilitador". (La Nación, 15 de setiembre del 2015). Entonces, como se puede notar con base en los planteamientos tanto de Chaves como Vargas, el llamado a "huelga general nacional" de "grandes dimensiones", era un engaño para las bases sindicales de los sindicatos a los cuales representa, así como una burda maniobra, para intentar obligar al gobierno de Solís, a convocar y sentarse en una mesa de diálogo, con intermediación de la Iglesia católica, para terminar negociando, sin autorización y sin ser aprobado por sus bases, los "regímenes salariales del sector público", es decir, todos los salarios, los componentes salariales y el empleo público.

Del Llamado a la Unidad Sindical de Patria Justa a BUSSSCO… a los Dimes y Diretes

En su flamante comunicado convocando a la "huelga general nacional" de "grandes dimensiones", el bloque sindical Patria justa "… hace un llamado a los diferentes sectores sociales y sindicales involucrados en esta circunstancias, especialmente al grupo organizado en el BUSSCO (Bloque Unitario Sindical Social Costarricense), para iniciar conversaciones de inmediato, afín de concretar los puntos en común, incluyendo la fecha y las características del movimiento, para desarrollar una gran acción de enfrentamiento a las fuerzas del capital oligárquico neoliberal y la derecha extremista". Este llamamiento de Patria Justa al bloque sindical BUSSCO, en términos generales, era correcto y parecía un llamado serio y real, para concretar una gran alianza sindical de los principales bloque sindicales del país en contra de los sectores neoliberales, de derecha y del gobierno, que pretenden destruir los regímenes salariales y de empleo del sector público, para financiar el déficit fiscal producido por los gobiernos del PLN. Nótese la grandilocuencia de las palabras de Patria Justa en este llamado unitario hacia BUSSCO para desarrollar "una gran acción de enfrentamiento", lo cual daba la apariencia de que realmente Patria Justa estaba convocando al BUSSCO a realizar acciones que frenara y derrotara la ofensiva neoliberal en contra de los salarios y el empleo público, sin embargo, esas era pura fraseología hueca.

El día 16 de setiembre del año en curso, el bloque sindical BUSSCO le comunicó por escrito a Patria Justa cuál era su posición sobre el llamado a la unidad sindical que le había realizado aquel. En esta respuesta, BUSSCO responde que "… se ha dictaminado declinar el llamado propuesto en su comunicado" y, más adelante, plantea las razones, por las cuales rechaza concretar la unidad sindical, entre las cuales señala que "Para los efectos señalados BUSSCO profundizó fundamentalmente en la consideración de múltiples hechos correlacionados surgidos en los últimos días, ampliamente conocidos por la opinión pública en general. Cabe agregar que el Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense, conserva irrenunciablemente como su objetivo esencial el derribamiento del modelo neoliberal, especial circunstancia que en no pocas ocasiones nos diferencia notablemente en razón de algunas impresiones emitidas públicamente por dirigentes de Patria Justa". El énfasis es de la carta de respuesta



de BUSSCO hacia Patria Justa, no nuestro. En esta respuesta de BUSSCO para rechazar la unidad sindical con Patria Justa, además del sectarismo típico entre las burocracias sindicales, existe un lenguaje sibilino como la "consideración de múltiples hechos… surgidos en los últimos días", los cuales no se señalan ni mencionan.

Por otra parte, el planteamiento, aparentemente serio, de BUSSCO en el sentido de que tienen como "objetivo esencial el derribamiento del modelo neoliberal", lo cual lo diferencia de Patria Justa, no justifica no poder realizar y concretar la unidad sindical con Patria Justa por la defensa de los derechos puntuales de los regímenes salariales y de empleo en el sector público de los cuales son parte las bases sindicales a las cuales representan ambos bloques. El objetivo "esencial" o estratégico como diríamos nosotros, no debe anteponerse ni ponerse como pretexto u obstáculo a concretar la unidad sindical entre organizaciones y bloques sindicales, por la defensa de las conquistas laborales obtenidas por los trabajadores del sector público a lo largo de muchos años. La respuesta de bloque sindical BUSSCO es un grave error político y sindical por parte de los dirigentes de los sindicatos de BUSSCO. La cuestión planteada por los dirigentes de BUSSCO sobre "el derribamiento del modelo neoliberal lo dejamos para abordarlo en un próximo artículo, y, polemizar con ellos como pretenden ese hacer ese "derribamiento del modelo neoliberal".

No se justifica la división

Conocemos y entendemos las diferencias inter-burocráticas entre BUSSCO y Patria Justa, sin embargo, ellas no justifican la división y la lucha por separado de las principales organizaciones sindicales por la defensa de los derechos, conquistas y condiciones de vida de los trabajadores organizados en los sindicatos del sector público. Con base en lo anterior, les exigimos a las organizaciones sindicales que conforman los bloques sindicales BUSSCO y Patria Justa que lleven a sus bases sindicales la discusión y votación democrática, tanto de la unidad sindical de ambos bloques sindicales como de la nefasta política de instalación de mesas de negociación y diálogo para negociar y pactar con el gobierno reformas de los regímenes salariales, sus componentes salariales y el empleo público. Estamos seguros y convencidos que, someter esos puntos a la discusión en Asambleas democráticas de los trabajadores, de ambos bloques sindicales, ellos como trabajadores y no como burócratas sindicales, apoyarían y votarían a favor de la unidad de sus organizaciones sindicales y la lucha en las calles para defender sus derechos y conquistas, así como para derrotar las políticas de los neoliberales y del gobierno Solís. La división de BUSSCO y Patria Justa, así como la instalación de mesas de diálogo, para negociar los salarios y empleo público le hacen el juego y favorecen a los sectores neoliberales y al gobierno de Solís.

EXIGIMOS LA LIBERTAD DE ORLANDO BARRANTES CARTÍN E IVÁN ANGULO VARGAS!!

Orlando Barrantes Cartín e Iván Angulo Vargas son dos conocidos dirigentes del Consejo Nacional de Trabajadores Bananeros (CONATRAB), quienes el pasado 16 de septiembre, después de tres intentos y un largo y amañado juicio, fueron condenados a 12 años de prisión.

La Fiscalía General de la República (FGR) o Ministerio Publico de Costa Rica acusó a Barrantes y Angulo de secuestrar policías cuando se produjo un conflicto con trabajadores y campesinos de la zona bananera de Guapiles, en el año 2000, como parte de las luchas que se produjeron contra el paquetazo neoliberal conocido como "Combo del ICE", que conllevó a tomas y bloqueos en gran parte de Costa Rica.

En estos 15 años, la Fiscalía de Costa Rica ha procesado a Barrantes en cuatro juicios, hasta que al final consiguieron condenarle con pruebas y argumentos falsos. El objetivo de esta condena es castigar ejemplarmente a conocidos y combativos dirigentes obreros y populares, para atemorizar a los trabajadores de la zona, en momentos en que crece el descontento social contra el gobierno del actual presidente Luis Guillermo Solís.

La costa caribe de Costa Rica ha sido escenario de grandes luchas de resistencia contra la ofensiva neoliberal. Recientemente fue condenada a cinco años de prisión la dirigente popular Paulina Briones, por oponerse la onerosa concesión de la entrega de los puertos del Caribe a la transnacional APM Terminals. La sed de venganza de los capitalistas no tiene límites.

El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) expresa su solidaridad centroamerianista con los compañeros Orlando Barrantes e Iván Angulo, injustamente inculpados. Condenamos la criminalización de la protesta social y demandamos a las autoridades del Ministerio Publico y de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica que se le dé trámite de urgencia al recurso de apelación presentado por los abogados defensores. Mientras tanto, exigimos la libertad bajo palabra de los compañeros Orlando Barrantes e Iván Angulo, mientras se realiza un nuevo juicio en el que se haga verdadera justicia y no se criminalice la protesta social. La realización de cuatro juicios sobre una misma causa penal demuestra la saña y la clara intención del Estado de Costa Rica de ejercer acciones punitivas contra dirigentes obreros y populares.

Llamamos a las centrales obreras y campesinas, sindicatos y organizaciones populares, de jóvenes y mujeres, de la región centroamericana, a sumarse a la campaña de repudio contra la falsa justicia que se aplica solo a los dirigentes obreros y populares que se atreven a luchas contra el sistema capitalista.

Enviar pronunciamientos, fax, correos, a las siguientes direcciones (con copia a elsoca@elsoca.org, para su difusión):

Luis Guillermo Solís, Presidente de Costa Rica:

http://presidencia.go.cr/contacto/

Zarela Villanueva Monge, Presidenta de la Corte Suprema de Justicia

presidencia@poder-judicial.go.cr

Teléfono: (506) 2295-3680

Jorge Chavarría, Fiscal General de la Republica

jchavarriagu@poder-judicial.go.cr

Libertad inmediata a Orlando Barrantes e Iván Angulo!!

Centroamérica, 18 de Septiembre del 2015Secretariado Ejecutivo Centroamericano (SECA)

Partido Socialista Centroamericano (PSOCA)

POR UN AUMENTO GENERAL DE SALARIOS, MOVILICÉMONOS YA!!

Por José María Flores

Sin duda alguna que los salarios de los trabajadores hondureños fueron devorados por la devaluación de la moneda nacional y por el incremento de los productos de la canasta básica y servicios públicos en los últimos 6 años. Los aumentos miserables negociados por las dirigencias de las Centrales Obreras, la empresa privada y el gobierno son insignificantes ante el aumento exorbitante de los productos básicos de las familias.



Para que el gobierno de Juan Orlando Hernández lograra mejorar sustancialmente los indicadores macroeconómicos del país, ha contado con la complicidad de las dirigencias de las Centrales y de la mayoría de los sindicatos, quienes en vez de movilizar a los trabajadores para obtener aumentos acordes con el incremento del costo de vida, han optado por negociar los miserables aumentos al salario mínimo, hay que señalar que todos aquellos empleados públicos que ganan más del salario mínimo han tenido congelados los salarios desde el año 2009, exceptuando a los policías que si han recibido sus aumentos respectivos.

Mientras muchos de los funcionarios actuales se han vuelto millonarios o multimillonarios por actos de corrupción como el del saqueo al IHSS, los empleados públicos se las ingenian cada día para poder suplir las necesidades básicas del hogar.

Gobierno de JOH anuncia demagógico aumento salarial

El proyecto del presupuesto general correspondiente a 2016 supera los 204 mil millones de lempiras, un aumento del 5.8% en relación al 2015, que significa 11,300 millones de lempiras más en comparación al presupuesto 2015, que es de L192,700 millones. Según el funcionario Borjas, el documento presentado no incluye nuevos tributos y que lo que se busca es ampliar la base de contribuyentes. EH (12/09/2015).

Nuevamente corre peligro el salario de los docentes, quienes están excluidos del pago del impuesto sobre la renta, ampliar la base de contribuyentes, significa que nuevamente ponen como sacrificado a los maestros, quienes vendrían a engrosar dicha lista y que han sido muy publicitados por diferentes sectores de la burguesía y del gobierno como candidatos a pagar tal tributo, sin duda alguna que es el sector a pegarle la tarascada para inflar los ingresos del estado.

Según el asesor presidencial Marvin Ponce, el gobierno reservó en el presupuesto general del 2016 al menos cuatro mil millones de lempiras para incremento salarial de los empleados públicos.

El proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal del próximo año fue aprobado por el Consejo de Ministros y turnado a la Cámara Legislativa para su respectiva discusión y aprobación.

Ponce recalcó que el Presidente Juan Orlando Hernández propuso el incremento salarial para los empleados públicos, dado que han pasado varios años sin incentivar sus ingresos. Aclaró que los aumentos serán priorizados entre los diferentes servidores del Estado, con preferencia para maestros, policías, militares, enfermeras, médicos, entre otros. Pero será el Congreso el que finalmente determinará las partidas presupuestarias para cada uno de estos grupos de asalariados. LT (10/09/2015).

De todos estos sectores han sido los militares y los policías lo que han recibido las mayores tajadas del presupuesto general de la república.

Los trabajadores a movilización ya

El año 2016 es un año político, por que se convoca a elecciones internas, JOH en su afán reeleccionario desea utilizar un aumento salarial demagógicamente y para que le impulse en su campaña, este aumento aún se desconoce cómo se proporcionará y en qué cantidades, pero tratándose de todo el engranaje público nos da la pauta de que será miserable. Los trabajadores públicos deben salir a luchar por un aumento que corresponda al aumento del costo de la vida y a la devaluación monetaria.

Pero también se debe pelear por recuperar las conquistas perdidas y los institutos de previsión social. La nueva Ley de seguridad social solo conduce a la privatización de la salud.

Por todo lo anterior, desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) llamamos a todos los trabajadores a unificarse en la lucha por un digno aumento general de salarios, sin excluir de la lucha a los empleados de la empresa privada, principalmente de las maquilas que son sobre explotados en el trabajo por hora. También se debe integrar a los campesinos que trabajan por un salario miserable de subsistencia.